

Plaza pública

para la edición del 30 de junio de 1996

Violencias

Miguel Ángel Granados Chapa

La aparición de varios pelotones de miembros del Ejército Popular Revolucionario, en el acto recordatorio de la matanza del 28 de junio de 1995, y la presentación de su Manifiesto de Aguas Blancas, es una importante señal de violencia política organizada, cuyo significado importa aclarar urgentemente.

Puede que ser que el EPR sea lo que dice ser. Sin contar los legendarios precedentes de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, al menos desde 1993 se tienen noticias ciertas de la presencia de grupos armados en varios puntos de Guerrero, que habrían optado por la resistencia armada aun antes de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva lacandona. Puede ser, también, una manifestación de la "narcoguerrilla", es decir la integración de bandas dotadas de poderoso armamento destinado a la industria del secuestro y/o a proteger el trabajo de productores y comerciantes de droga, que se parapetan tras una apariencia contestaria. Y puede, ser, en fin, un peligroso acto de simulación organizado desde el poder, con el doble fin de actuar fuera de los controles legales (como escuadrones de la muerte) y de paso imputar la violencia a sus adversarios políticos.

La primera hipótesis tiene fundamento en una diversidad de reportes gubernamentales e informes periodísticos que han dado cuenta puntual de la presencia guerrillera en aquel estado. Las condiciones sociales y políticas prevalecientes en la comarca, amén de su abrupta geografía, dan verosimilitud a reportes como los aparecidos a principios de 1994 en *El sol de Acapulco*, en *La Jornada* en julio siguiente, y en agosto del año pasado en el semanario *Proceso*. Allí se recogen datos provenientes de documentación militar y de seguridad nacional. Entre las agrupaciones citadas como protagonistas de una nueva insurgencia armada figuran el Ejército de Liberación de la Sierra del Sur, las Fuerzas Armadas Clandestinas de Liberación Nacional, y el Comando Armado Revolucionario del Sur, que al comenzar 1995 dio a conocer un comunicado:

"Vamos a hacer la guerra por la definitiva liberación de los guerrerenses no por mentalidad guerrerrista sino porque el gobierno y su partido no nos dejan otra alternativa. ¡Nuestra paciencia se acabó, no nos queda más!. La guerra, por larga y dolorosa que vaya a ser, es la única esperanza que tenemos para empezar a construirles a nuestros hijos un futuro más próspero, un futuro mejor, una vida más digna", proclama el CARS.

(La acción de algunos de esos grupos ha sido situada en el límite de Guerrero y Oaxaca, estado en que también han aparecido claras señales de insurgencia armada. Un "comandante David" y un "subcomandante Paulino" dirigieron al gobernador Diódoro Carrasco, en enero de 1995, un comunicado en que anuncian la formación del

Comando Clandestino Indígena de Liberación Nacional de los Altos y Bajos de Oaxaca. Y aunque, en contrapartida se conoce la actuación de guardias blancas organizadas por caciques, lo cierto es que en los años recientes se ha intensificado la movilización del Ejército federal, en busca de campamentos de guerrilleros).

En el elenco de grupos armados clandestinos guerrerenses figura un Movimiento Revolucionario Popular, que quizá se transformó después en el Ejército Revolucionario Popular, que como tal no aparece registrado en los reportes oficiales sobre grupos alzados en Guerrero. Pero sin duda era conocido al menos por algunos de los organizadores del acto luctuoso del viernes pasado, pues el cordón de seguridad formado por militantes de la Organización campesina de la Sierra del Sur facilitó el tránsito del grupo armado desde su descenso del monte hasta la tribuna donde poco antes había hablado Cuauhtémoc Cárdenas, y protegió su retirada. Asimismo, algunos organizadores tranquilizaron a quienes, ajenos a la cinematográfica aparición de los pelotones armados, temieron que se tratara de una agresión militar, pues la vestimenta de los hombres armados y encapuchados. Había, con toda evidencia, un acuerdo previo o al menos una advertencia de que presuntos guerrilleros aparecerían entre quienes acudieron al vado de Aguas Blancas a recordar a las víctimas de hace un año. El comando del ERP les rindió homenaje con 17 descargas de salva, una por cada uno de las personas asesinadas por la policía motorizada.

El manifiesto del ERP fue leído en español y en náhuatl, en una obvia identificación con la vocación indígena del EZLP. El texto no presenta particularidades, y corresponde a la retórica del caso. Sólo se sabrá más sobre sus propósitos si llaman a la conferencia de prensa anunciada por el "capitán Emiliano", cabeza del comando. Por lo pronto, el primer día de su presencia pública no fue sólo protocolario y vistoso: unas horas después el Manifiesto del ERP era entregado a automovilistas por miembros armados de ese grupo, en la carretera federal México-Acapulco, muy cerca de Chilpancingo. Aunque el Ejército había llegado a Aguas Blancas horas después del mitin, en busca de los insurgentes, para detenerlos por el uso de armas de fuego, agentes de la policía judicial, y no militares, fueron los encargados de capturar a los propagandistas. Al intentarlo, se produjo una balacera en que tres agentes resultaron heridos.

La segunda hipótesis, que se trate de bandas meramente delincuentes, sin motivación política, es sugerida por el gran armamentismo en la zona, y el elevado índice de criminalidad, sobre todo secuestros, perceptible en todo Guerrero. A menudo formadas por ex agentes, o miembros de corporaciones policiacas, esas bandas se proveen de armas en Estados Unidos. En 1992, un ex jefe de grupo y un ex agente de la policía judicial local fueron detenidos con un cargamento de 200 fusiles AK-47. Pero eso es pequeño comercio. En febrero de 1994, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió informe de su agregado en Washington, sobre la

próxima entrega de dos mil armas, parte de un pedido mucho mayor, de hasta veinte mil "cuernos de chivo", que estaría por ocurrir. Y en efecto, en mayo se conoció el desembarque, en la laguna de Coyuca, de ocho mil armas de ese tipo. En un informe de la Policía Judicial Federal, citado por Proceso, se avisa que un comandante de ese cuerpo, José Luis Reynoso, negó que esa entrega se hubiera realizado, porque "si reportaba haber comprobado el desembarco, le habrían ordenado encontrar las armas, lo cual era virtualmente imposible".

La tercera hipótesis, la de una simulación, surge a partir de la suspicacia y reticencia con que Cárdenas observó la llegada del comando armado a Aguas Blancas. El había acudido a expresar solidaridad a los deudos de las víctimas del año pasado, que en los procesos judiciales correspondientes son representados por Samuel del Villar, secretario de asuntos jurídicos y reforma del estado del PRD. Ambos, y otros dirigentes perredistas, se apresuraron a manifestar su desconfianza en la irrupción del ERP, pues consideraron que "la mano de los victimarios bien podría estar tras de estos hechos". Reprobaron la presencia de ese acto al que fueron "expresamente invitados por los organizadores" y calificaron la presencia del comando de "grotesca pantomima que carecería de importancia si no fuera por el pesado armamento que portaba". Opinaron, en fin, que la manifestación armada "constituye una desconsideración y un agravio para los familiares de las víctimas y para quienes con respecto y seriedad acudimos al acto, y constituye un acto de gran

irresponsabilidad y de provocación que en nada contribuye a la tranquilidad de la región".

No es gratuita, ni sicótica la apreciación de los líderes perredistas sobre el intento de vincularlos a la violencia, en sentido contrario a su decisión de conducirse por las vías institucionales. Apenas el martes pasado, independientemente de su intención, el propio Presidente de la República había quedado en el centro de una provocación, cuyas secuelas no han terminado y que agravan la ya muy perturbada y precaria gobernabilidad en Tabasco.

En una escalada que debe ser atajada cuanto antes, la decisión presidencial de viajar a esa entidad, causó la movilización perredista, que a su vez provocó la del gobierno local y su partido. En los bloqueos de caminos e instalaciones se produjeron enfrentamientos cuyo saldo fueron decenas de lesionados, algunos de ellos graves, y varios vehículos destruidos. Con toda su importancia y sin pretender reconocerles una normalidad que sería enfermiza, ese género de agresiones de que las partes se acusan recíprocamente han sido muy frecuentes desde poco después del 20 de noviembre de 1994 en que, al decir del Presidente Zedillo, Roberto Madrazo fue elegido gobernador "por la voluntad mayoritaria de los tabasqueños". No se puede condonar a nadie la práctica de la violencia, y ésta debe ser erradicada, especialmente aquella impulsada por el gobierno mismo: Pedro Jiménez León, el ex líder del PRI que hoy lo es del Congreso local, compró un cargamento de estacas con que se dotó a los priístas que las usaron como garrotes.

Y es que no puede ignorarse que la violencia practicada desde el poder, on con su anuencia, enferma a la sociedad en mayor grado que cualquiera otra. Y eso es lo que en los días siguientes a la inoportuna visita presidencial ha ocurrido en Tabasco. El miércoles, un grupo de priístas tomó la estación XEVA y convirtió un programe periodístico de gran arraigo y largo alcance en instrumento de sus resentimientos.

La emisora, establecida en abril de 1960, ha contado casi desde entonces con una emisión muy escuchada y popular, el "Telereportaje", fundado por don Jesús Sibilla y continuado por su hijo del mismo nombre. Antes de que Villahermosa se poblara del ruido de las ciudades contaminadas por la civilización bárbara, era posible caminar por las calles sin llevar un radio portatil y no perderse ni un instante de ese programa, pues su sonido brotaba de todas las ventanas de la ciudad. Dedicado en amplia medida a la información, cumple sobre todo una función de enlace entre su auditorio, con la difusión de recados aun de orden personal. es, de ese modo, un buzón colectivo, una plaza de encuentro entre grandes sectores de tabasqueños.

Por esa razón, "Telereportaje" no ha podido ser ajeno a la agitación social que vive Tabasco especialmente desde que en 1988 se rompió el virtual monopolio que el PRI tenía sobre la vida pública local. Andrés Manuel López Obrador, dos veces candidato disidente a la gubernatura, es invitado con frecuencia a esa emisión, no necesariamente por afinidad política sino porque su figura y sus acciones forman parte de la vida

cotidiana en Tabasco, que es la materia prima del programa de Sibilla. La misma razón hace que las consignas perredistas para sus movilizaciones se emitan a través de "Telereportaje", como ocurrió el martes pasado, circunstancia que llevó a los gobiernistas al paroxismo de la ira. Pero una cosa es que el conductor del programa dé acceso al público a sus micrófonos, y otra muy distinta que sea víctima de un asalto que impida realizar la tarea normal y la usurpe, en una acción vitanda que al mismo tiempo busca ser castigo y advertencia.

Sin embargo, esta vez el exceso en la respuesta priísta se volverá contra Madrazo. Justamente indignada por esa agresión intolerable, la sección local de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, a que pertenece el licenciado Fernando Pasos de la Torre, concesionario de la emisora, decidió separarse de la cúpula empresarial, adicta sin recato al gobernador. Esta fisura en la unidad patronal puede ser el comienzo de la liberación de los empresarios no involucrados ilegalmente con el gobierno de Madrazo, para impedir que su sector sea usado como brigada de choque del gobernador.

En efecto, Enrique Dagdug, presidente de la Junta Coordinadora Empresarial amenazó a López Obrador con agresiones personales, "garrote con garrote" y anunció su propósito, fundado en sabe qué legalidad, de no permitirle que regrese a Tabasco. Y ya sea que su advertencia vaya en serio o alguien se aproveche de su ligereza, han comenzado las agresiones físicas contra

López Obrador: una bomba de fabricación casera fue colocada el viernes a las puertas de su casa. Aunque el artefacto no estalló, es una señal ominosa que no puede ser solsyada.

Falta, sin embargo, que el gobierno local atribuya ese atentado al propio PRD, pues la desvergüenza de las autoridades locales no reconoce frontera. Así lo muestra la secuela de la golpiza asestada el jueves 27 al diputado local Julio Alvarez Santos. Dentro del propio recinto legislativo, el dirigente perredista fue víctima de un ataque a patadas y con hebillas de cinturón. El legislador identificó entre sus agresores a un funcionario del Congreso, Víctor Priego Zurita. Pero ahora el comprador de palos para tundir a perredistas, Jiménez León, dice que los agresores de su colega (mal que le pese, lo es) fueron correligionarios macuspanenses de la víctima.

La combinación de violencia oficial e impunidad es fuente de violencia de respuesta. Como en Guerrero, hacia allá se va en Tabasco.